

La partida de la democracia

Carta abierta en respuesta al editorial de EL PAIS “la partida de la porra”

El diario EL PAIS nos honra hoy con su atención en **la editorial** respecto a las investigaciones sobre corrupción política en Cataluña. El diario centra su atención en unos supuestos informes que dice tener de los que llevan días asegurando que están hechos por policías; cabe suponer que han confirmado la identidad de los autores de los “informes fantasmas”, en folios en blanco sin membrete ni firma, pues de lo contrario estarían dando credibilidad a una mentira difundida anónimamente. Nos llama la atención que se ataque a presuntos policías emboscados en base a “informes fantasmas” al tiempo que se critica que otros diarios hagan lo mismo porque se centran en el contenido y no en los autores.

Hace muchos años, a principios de los ochenta, el diario EL PAIS y su director entonces, Juan Luis Cebrián, se destacaron por apoyar (junto con Diario16) los movimientos sindicales entonces clandestinos en la Policía. Eran ilegales pero entendía el diario entonces progresista que eran necesarios cambios en las normas y procedimientos para que España fuera una verdadera democracia. Entonces EL PAIS era altavoz de esos movimientos sindicales y no solo no criticaba que fuera una voz alternativa a la oficial de la Policía sino que la alentaba y le daba cauces de expresión, por considerar que la libertad de expresión, la democracia y la policía civil con sindicatos era consustancial al modelo democrático. El diario tenía razón.

Algunos de los que estaban entonces en la clandestinidad en el SUP intentando consolidar un régimen democrático en España y una policía cuyos valores fueran el servicio público de calidad, garantizando seguridad y protección para el ejercicio de las libertades a los ciudadanos siguen hoy en el SUP defendiendo lo mismo y cobrando un salario decente de policía; en cambio, el entonces director del diario es hoy un tiburón financiero que cobra 13 millones de euros anuales, viaja en avión privado, ha expulsado a fundadores del diario tras 30 años de trabajo con una patada en el trasero, y lo ha hecho con la aplicación miserable de una reforma laboral que consideraba inmoral en sus editoriales; se han mirado al espejo.

EL PAIS, acostumbrado a variar pautas de actuación de gobiernos con sus editoriales no quiere entender que su tiempo de esplendor ya pasó; que no aceptamos que expidan carnés de nada quienes acostumbran a poner etiquetas a los demás cuando en la práctica hacen lo mismo que critican o lo contrario de lo que defienden; quizás no entiendan que ellos no son la opinión pública y que en democracia un sindicato de policías tiene derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que nos afectan (la corrupción y la democracia, entre otros) sin que el diario socialista pueda hacer nada para evitarlo. Podemos opinar aunque no coincidamos con EL PAIS y sin tenerlos como guía espiritual de referencia.

En este mismo editorial en el que ataca al SUP y al trabajo de los policía alaba la buena labor en la lucha contra la corrupción de fiscales y jueces, sin entender (que sería grave) o ignorando conscientemente (que sería peor) que sin una policía formada y limpia nada podrían hacer las Autoridades judiciales contra la corrupción. ¿A qué policía del “comando Rubalcaba” que no haya pisado nunca la calle le han preguntado para decir la barbaridad de

que no podemos investigar nada sin expresa autorización judicial? ¿Qué conocimiento de la realidad tiene el primer diario del país para aseverar tal cosa? ¿Han preguntado a los muchos y buenos periodistas del área de Interior que conocen de esta materia?

En España hay policías de todas las ideologías porque las ideas son libres en democracia; la mayoría de ellos cumplen profesionalmente con su trabajo que en algún caso han conseguido una ardua defensa del diario EL PAIS (por ejemplo, en los conocidos como “caso Bono”, “caso ácido bórico” o “caso Gurtel”), sin que haya tenido nada que ver el hecho, casual, de que siempre ha coincidido la defensa de los policías con la defensa de la posición del PSOE o de Rubalcaba.

En España se ha instalado la corrupción ampliamente y ningún ámbito de la sociedad es impermeable a la misma: judicatura, política, policía, medios de comunicación... Los ciudadanos lo intuyen y nosotros lo sabemos porque tenemos indicios sólidos de ello. No es un asunto de ideología, de izquierdas o derechas porque la hay en todos los estamentos y en todas las ideologías por más que haya quienes quieran verla más en uno u otro partido según que sean de uno u otro signo ideológico. Desde el SUP defendemos que policías decentes, sujetos a la ley y bajo el control y dirección de las autoridades judiciales combatan a la corrupción desde la legalidad; pero si se diera el caso de que la corrupción impide esa tarea será cuestión de buscar otros procedimientos, como se hizo en la clandestinidad, que contribuyan a que la Constitución y las leyes imperen por encima de los corruptos que las utilizan y los medios de comunicación que los protegen.

Muchos policías, y nosotros como organización sindical, tenemos la impresión de que no se ha combatido la corrupción en general, la corrupción política en particular y en especial en Cataluña con el rigor que exigen las leyes, y que es posible que esa laxitud haya sido como moneda de cambio para que se mantuviera un perfil político bajo de demandas políticas independentistas en dicho territorio. Tal vez tantos años de no querer ver lo que es tan evidente ha sembrado el clima adecuado para que policías decentes indignados, con el mismo espíritu con el que exigían ser civiles y tener derechos, estén ahora trabajando sin ningún interés personal para que España sea un Estado de Derecho donde los corruptos estén en la cárcel y no en las instituciones y con vástagos multimillonarios en empresas especulativas o padres o suegros con fortunas que no pueden justificar. Esos policías, si existen, saben que el SUP los apoya y estamos dispuestos a actuar jurídica y sindicalmente para combatir la corrupción como lo que es, una plaga tan dañina para la democracia como el terrorismo, un cáncer social que hay que extirpar para que no acabe con la sociedad del Estado de Derecho en que vivimos. Y ya sabemos que en esta situación el diario EL PAIS estará exigiendo a los responsables políticos que identifique y sancione a los policías decentes para que puedan seguir campando a sus anchas los corruptos. Bueno es saber dónde está cada cual.

Madrid, 27 de febrero de 2012

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
Secretaría General

La partida de la porra

Las actuaciones policiales sin amparo judicial debilitan la democracia y la cohesión nacional

LA PUBLICACIÓN de informes anónimos por parte de algunos policías respecto a delitos y prácticas de corrupción llevadas a cabo supuestamente por políticos nacionalistas enlodó la campaña electoral de los recientes comicios en Cataluña. El hecho de que los informes no estuvieran firmados por nadie, aunque lucieran un sello oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP); la aclaración de los jueces encargados de instruir las causas de referencia (*casos Palau e ITV*), en el sentido de que ellos no habían encargado dichas investigaciones y de que no se incorporarán a la instrucción; la agitación orquestada por parte de la prensa de la caverna (véanse las ediciones de *La Gaceta* y *El Mundo* de ayer), y la irrupción extemporánea del Sindicato Unificado de Policía (SUP) pronunciándose al respecto, permiten suponer, entre otras cosas, que el control de los cuerpos de seguridad por parte de los responsables políticos es en gran medida inexistente. O lo que sería peor: que es absoluto y se emplea con fines partidistas, sin respeto al ordenamiento legal y con desprecio al amparo judicial efectivo que la Constitución garantiza a todo ciudadano.

Este periódico ha publicado en días pasados un resumen de cinco documentos policiales anónimos que denuncian presuntas corrupciones de la familia Pujol y del actual presidente de la Generalitat. Ni uno solo de esos documentos, que constituyen una amalgama curiosa entre datos ciertos y conocidos, pertenecientes a antiguos sumarios, otros relativos a los dos casos ya citados, y numerosas especulaciones sin prueba documental, ha sido avalado por autoridad judicial o política alguna. Pero el Sindicato Unificado de Policía, en una nota respuesta a las informaciones publicadas por EL PAÍS, ha salido en defensa de la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial, so peligro, según los sindicalistas, de que aumente considerablemente el número de delitos.

Sin legitimidad

Sorprende la asiduidad con que portavoces del SUP aparecen en los medios de comunicación informando sobre el desarrollo de operaciones e investigaciones de sus miembros. Los dirigentes del sindicato no tienen legitimación para convertirse en portavoces policiales, ni mucho menos para polemizar con la opinión pública sobre cuestiones sometidas a la instrucción judicial. Ante el silencio ominoso del director general del cuerpo, el protagonismo de quienes defienden solo intereses gremiales a la hora de pronunciarse sobre cuestiones que afectan a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos resultaría chusco si no generara una considerable alarma social. La que corresponde al hecho palpable de que existen fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de las que ninguna autoridad sale fiadora.

La hilarante información que la misma prensa cavernícola, con sospechosa coincidencia en sus datos, publicaba ayer en el sentido de que lo difundido por EL PAÍS estaba inspirado por la relación co-

mercial de su editora con una empresa presidida por Oleguer Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, ilustra bien a las claras sobre las calidades profesionales y el alineamiento con la extrema derecha del periódico propiedad de la editorial italiana Rizzoli.

La información respecto a la venta de inmuebles de PRISA a la empresa Longshore fue comunicada en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no se necesita que Mortadelo y Filemón investiguen nada al respecto. El grupo PRISA publicó además una nota de prensa hace más de cuatro años (julio de 2008) en la que informaba de las transacciones y señalaba que habían supuesto unas plusvalías de 227 millones, que iban a ser destinadas a la amortización de la deuda. Los intentos de relacionar la línea editorial de un diario con la militancia política de su casero quedarán, por lo demás, inscritos con todos los honores en la antología de las filtraciones chapuceras.

Corrupción

La corrupción política es un hecho que ha adquirido una gravedad inusitada en los últimos años y es de reconocer la brillante actividad de jueces y fiscales a la hora de perseguir a estos delincuentes de cuello blanco que se pretendían impunes por ejercer el poder. Desde el antiguo presidente de Baleares y exministro del Gobierno de Aznar, Jaume Matas, al yerno del jefe del Estado, una variedad de personajes de todos los colores y militancias políticas viene calentando el banquillo de los acusados, imputados como están de graves delitos económicos.

No es el partido del Gobierno el más capacitado moralmente para impartir lecciones al respecto, y en cualquier caso debe dejarse a los tribunales esta tarea, en la que la acción policial es clave si se lleva a cabo con profesionalidad, respeto a la ley y toda clase de garantías procesales al respecto. Si las autoridades consideran que el presidente de la Generalitat o cualquier otro político nacionalista son sospechosos de delitos, su obligación es comunicarlo a la fiscalía. Por lo demás deben poner orden en el Ministerio del Interior, impidiendo la difusión de informes fabulados de los que nadie se siente responsable, pero que difaman gravemente a las personas y agitan las pasiones políticas en tema tan delicado y trascendente como el proceso secesionista que se está viviendo en una comunidad de la relevancia de Cataluña.

Para quienes defendemos la unidad de España desde un convencimiento racional y moderno, frente a intentos independentistas que fragmentan la solidaridad entre los ciudadanos, es desesperante contemplar la resurrección del patriotismo cavernícola. Este no solo amenaza con agravar las disensiones y debilitar aún más la cohesión territorial. Constituye en sí un enemigo de la democracia al utilizar, como todo argumento ante los nacionalistas, el recurso a la partida de la porra. Pues en eso acaba convirtiéndose cualquier policía del mundo si no se somete a la ley.